

error en el etiquetado de la sustancia prohibida no supone que no haya culpa o negligencia del deportista.

El ponente se ha detenido considerablemente a la hora de hablar sobre el pasaporte biológico y las sanciones en base a presunciones. En estos casos, se sanciona sin que haya habido un test de resultado adverso (comúnmente conocido como test positivo). Como caso a destacar en este sentido, el conocidísimo caso de Claudia Pechstein.

Como institución mundial antidopaje encontramos la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) creada en 1999. El ponente la define como un organismo transaccional de composición mixta, sometido a derecho suizo, y cuya función consiste en promover, coordinar y monitorizar la lucha contra el dopaje, destacando los estándares internacionales y modelos de mejores prácticas recogidos en el Código Mundial Antidopaje. Las conductas antideportivas que constituyen dopaje son la presencia, el uso o intento de uso, el rechazo a presentarse a un control, la negación al deber de localización y la posesión, el tráfico y la administración, y la sanción en estos casos puede ser la descalificación, la inelegibilidad por 2-4 años o ambas, siendo las sanciones a los clubes únicamente sólo pecuniarias.

Cada Estado establece normalmente una lista de sustancias prohibidas cada año (la última en España data del 23 de diciembre de 2010), siguiendo el listado que publica la AMA con el mismo fin. No obstante, deportes como el automovilismo y el motociclismo gozan de peculiaridades como considerar el alcohol como sustancia prohibida. Es de destacar asimismo que para considerar una sustancia contraria a las normas antidopaje ha de mejorar potencialmente el rendimiento deportivo, provocar un riesgo real o potencial para la salud del deportista, que sea susceptible de enmascarar el consumo de otra sustancia que sí mejore el rendimiento deportivo o que la AMA entienda que su uso sea contrario al espíritu deportivo.

A nivel nacional, es importante señalar que hasta la entrada en vigor de la LO 7/2006 de protección de la salud y de la lucha contra el dopaje en el deporte no existía regulación legal que protegiese exclusivamente contra el dopaje. A partir de este momento, se empieza a perseguir cada vez más no solo al deportista sino también a su entorno. Con esta Ley Orgánica nace la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje del CSD (Consejo Superior de Deportes), abriéndose la posibilidad de que sea esta Comisión la que tramite el expediente disciplinario de dopaje y la que conozca del recurso contra las resoluciones federativas. La Agencia Estatal Antidopaje será la que revise las resoluciones de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje.

Por último, el ponente ha destacado la posibilidad de implantar en España la tarjeta de salud del deportista, y ha comentado los casos en los que se autoriza el dopaje con fines terapéuticos, siendo una condición fundamental para ello el hecho de que no exista otra alternativa terapéutica eficaz.

CEDD, cuando veremos qué decide sobre qué resolución debe prevalecer en apelación de una resolución federativa. Por último, ha intervenido Emilio García Silvero reseñando que las comisiones antidopaje federativas existen a nivel federativo pero no a nivel legislativo, y que por tanto técnicamente no deberían existir, y no deberían llevar a cabo en la práctica la descodificación de los datos en la tramitación del expediente de dopaje.

Después de la pausa para el café, ha tenido lugar la ponencia de **José María Alonso**, árbitro del TAS. Precisamente su ponencia ha versado sobre las Resoluciones recurribles y el procedimiento de revisión ante el TAS.

Desde el primer laudo del TAS (1987) muchos procedimientos tanto ordinarios como en apelación han tenido lugar. El ponente se ha centrado en el procedimiento de apelación ante dicho órgano. Dicho procedimiento de apelación tiene lugar frente a una decisión de una federación, asociación u otra entidad deportiva similar, siempre y cuando así lo establezcan los estatutos de dicha entidad, frente a laudos dictados por el TAS en primera instancia, frente a laudos dictados por tribunales arbitrales internacionales y cuando el recurrente haya agotado todos los recursos administrativos internos de la federación.

En España se ha debatido si esta sumisión al TAS evita poder ir a tribunales ordinarios. El 9 de Mayo de 2007, la sección 3ª de la sala contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional estimó el recurso de un conocido ciclista en virtud de la competencia única del TAS, basando su decisión en que si las federaciones nacionales son privadas tienen personalidad jurídica propia y deciden pertenecer o no a las federaciones internacionales, y en sus estatutos establecen una sumisión expresa a la jurisdicción del TAS, ésta competencia es exclusiva en tanto órgano de apelación.

Es importante, y así lo ha destacado el ponente, tener en cuenta el hecho de que la sede del TAS de encuentre en Lausanne, siendo este hecho para nada arbitrario. Es importante en cuanto a la *lex arbitri* por ejemplo, ya que en caso de vacío legal por las partes es el código de obligaciones suizo el que ha de tenerse en cuenta. También los jueces de apoyo en el arbitraje son jueces suizos, se aplica el orden público suizo (normalmente, el orden público procesal) y en los casos en los que se atente contra ese orden público suizo por un laudo del TAS se podrá recurrir ante el Tribunal Federal Suizo. No obstante, a pesar de que la sede esté en Suiza, no debemos olvidar que las partes lleguen a un acuerdo con el TAS para que la audiencia se lleve a cabo en otro lugar.

En cuanto a los árbitros, la lista es cerrada, siendo ahora mismo 150, que representan distintos sistemas jurídicos (civiles y common law). Recientemente, se ha implantado una norma de conflicto de interés, por la que los árbitros deben renunciar expresamente a ejercer como abogados, para ayudar a asegurar en mayor medida la independencia, objetividad y deber de confidencialidad como notas principales de su profesión.

El procedimiento de apelación comienza con el escrito del apelante (statement of appeal), normalmente a elevarse en un plazo de 21 días desde la notificación

